



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL
ASUNTO: APELACIÓN DE AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR
DEMANDANTE: ALBERTO CARDONA JARAMILLO
DEMANDADOS: GABRIEL JAIME, DAVID ALBERTO, Y RICARDO LEON RUIZ JARAMILLO – REPRESENTANTES DE LA SUCESIÓN DE MARIA IRMA JARAMILLO.
RADICADO: 050013105 013 2021 00359 03
ACTA No: 40

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso promovido por **ALBERTO CARDONA JARAMILLO** en contra de GABRIEL JAIME, DAVID ALBERTO, Y RICARDO LEON RUIZ JARAMILLO representantes de la sucesión de MARIA IRMA JARAMILLO, frente al auto proferido por la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual decidió negar la medida cautelar solicitada.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 40** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

El abogado ALBERTO CARDONA JARAMILLO instauró demanda ordinaria laboral en contra de los señores GABRIEL JAIME, DAVID ALBERTO y RICARDO LEON RUIZ JARAMILLO representantes de la sucesión de MARIA IRMA JARAMILLO, con la que pretende que se les condene al pago de honorarios profesionales y/o sumas de dineros correspondientes a enriquecimiento ilegal y abuso del derecho. Subsidiariamente, se declare la responsabilidad de los demandados en el pago de expensas comunes del bien común, y/o enriquecimiento ilegal por abuso del derecho¹.

¹ Carpeta Primera Instancia – Archivo 02 - Páginas 3 a 11.

El **8 de marzo de 2023** la activa solicitó como **medida cautelar el embargo de una copropiedad que tienen los demandados en el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria #00149587**² solicitud denegada en audiencia pública celebrada el pasado **4 de mayo de 2023**³ señalando que en el marco del proceso laboral sólo son procedentes la caución y las medidas cautelares innominadas al tenor de lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad C-043 de 2021. El embargo solicitado es una medida cautelar de carácter nominado.

Inconforme con esta decisión, en el recurso de apelación el demandante argumenta básicamente: **i)** Que el nuevo derecho que están propugnando los estudiosos del derecho, es que toda sentencia judicial tenga cabal cumplimiento y aplicación, y que no haya providencias de papel. Se debe acoger la solicitud de embargo para evitar que se burlen los derechos. **ii)** Solicita que esta Sala manifieste en definitiva si es procedente o no la medida cautelar pedida.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA – PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Con auto del **15 de mayo de 2023**⁴ se corrió traslado a las partes y la activa intervino para solicitar se revoque la providencia y en su lugar se ordene la inscripción de la demanda solicitada como medida cautelar, manifestando en síntesis⁵: **i)** Su vinculación al proceso ejecutivo hipotecario de RAMÓN VALENCIA CASTAÑO contra SAMUEL DE J. URIBE se cumplió al momento de la diligencia de secuestro que practicara el Juzgado Primero Civil de medidas cautelares, providencia que fue confirmada por el Juzgado 11 Civil Municipal y confirmada igualmente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito. Convino con los dueños de las mejoras continuar en su defensa y fue así como sufragó los derechos periciales. La parte actora desistió de las medidas cautelares con lo cual el proceso hipotecario desaparece por la imposibilidad de hacer ninguna actuación judicial. **ii)** Su actuación fue a *cuota litis*, se trató entonces de una negociación de riesgo compartido, y/o cuentas en participación o sus semejanzas. La sustracción en el pago de la cuota parte que les corresponde a los comuneros es un enriquecimiento ilegal e injusto contra el comunero que hizo los gastos. **iii)** Insiste en solicitar la inscripción de la demanda para la garantía de sus derechos, haciendo referencia a la doctrina en materia de medidas cautelares como medio para el cumplimiento de las sentencias.

² Carpeta Primera instancia – Archivo 57 – Página 5

³ Carpeta Primera instancia – Archivo 63 y 64

⁴ Carpeta Segunda instancia – Archivo 02.

⁵ Carpeta Segunda instancia – Archivo 03.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación que determina como **problema jurídico** a definir en esta instancia, si a partir de lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico **el embargo** como medida cautelar resulta procedente en el marco de un proceso ordinario laboral.

3. CONSIDERACIONES

La Juez de instancia ha denegado la solicitud de decretar la inscripción de la medida como medida cautelar argumentando básicamente que en el marco del proceso laboral sólo son procedentes como medidas cautelares la caución y las innominadas que fueron definidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-043 de 2021.

La tesis del recurrente, va dirigida a que se revoque la decisión para que en su lugar se ordene la medida cautelar solicitada, en tanto, si no se accede a ella, la sentencia será incumplida lo que a la postre es una burla para sus derechos.

Debe señalarse que, si bien en los alegatos de conclusión se menciona la **inscripción de la demanda** como medida cautelar solicitada, lo cierto es que la solicitud que fue objeto de apelación fue la **"embargo de copropiedad que tienen los demandados en el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria #00149587⁶"**

Con relación al régimen cautelar, para la Sala es claro que este tiene amplio sustento en el texto de la Constitución Política, puesto que desarrolla el principio de eficacia de la administración de justicia. Las medidas buscan asegurar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades pues los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar su resultado, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. En las sentencias C-379 de 2004 y C- 490 de 2000 se definen como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo asunto.

La jurisprudencia respecto a las medidas cautelares determina que al Juez le corresponde decidir en cada caso concreto sobre su procedencia y su extensión, así como con respecto al cumplimiento de los requisitos señalados para el efecto por la ley; siendo claro que lo que justifica estas medidas es la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de la providencia jurisdiccional definitiva. Y, ante todo, la protección de la igualdad de las partes y la garantía de la eficacia de la administración de justicia.

Así, el artículo **85A del CPTSS**, modificado por el **artículo 37A de la Ley 712 de 2001**, consagra **la medida cautelar procedente en el marco del proceso ordinario laboral** así:

⁶ Carpeta Primera instancia – Archivo 57 – Página 5

"Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden".

De lo anterior se colige que son dos los eventos en que, en el curso del proceso ordinario, previa narración de hechos y motivos que la conducen a ello, puede la parte demandante solicitar la imposición de medidas cautelares, a saber: **i)** Cuando el demandado efectúe actos que se estimen como tendientes a insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia; y **ii)** Cuando se considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Ahora bien, en sentencia **C-043-2021** la Corte Constitucional declaró exequible condicionadamente el artículo en cita, bajo el entendido de que en la jurisdicción ordinaria laboral también podrán invocarse medidas cautelares innominadas, esto es, las previstas en el **literal c) del numeral 1º del artículo 590 del C.G.P.**, al respecto se señaló:

"(...) la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que **el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP**, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. **Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1º, literal "c" del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas**, por las siguientes razones.

(...)

En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal "c", numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que "encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma,

prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión".

Por el contrario, las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil. Si se admitieran en el proceso laboral todas las medidas cautelares de la referida norma procesal general, implicaría que en él pudiera solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, pasando por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual.

Así, la referida interpretación judicial del artículo acusado aumenta significativamente la garantía del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de los justiciables del proceso laboral, pues para decretar la medida cautelar innominada el juez seguirá los parámetros establecidos por el art. 590 del CGP. Con esto se superan las desventajas que los demandantes señalaban respecto del art. 37A de la Ley 712 de 2001, referidas (i) al listado de medidas disponibles, (ii) su efectividad, (iii) el estándar para decretarlas y (iv) el plazo para resolverlas. Sumado a ello, este entendimiento de la norma es conforme con los principios de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, el de contar con un recurso judicial efectivo y con el trato especial que la Constitución Política otorga a los derechos al trabajo y a la seguridad social, tanto en su dimensión sustancial como procedimental.

(...).

Conforme lo expuesto, la Sala concluye que la disposición acusada admite dos interpretaciones posibles. (i) Una primera conforme a la cual es una norma especial que impide la aplicación, por remisión normativa, del régimen de medidas cautelares dispuesto en el CGP, posición esta adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que lleva a concluir que la disposición vulnera el principio de igualdad. Pero también (ii) otra interpretación que reconoce que la norma no impide esta posibilidad de aplicación, por remisión normativa, concretamente del literal c) del numeral 1º del artículo 590 del CGP, referente a la facultad del juez de decretar medidas cautelares innominadas.

De estas dos interpretaciones posibles, en concepto de la Sala Plena, debe preferirse la segunda, porque hace efectivos los principios constitucionales de protección especial al derecho al trabajo, ínsitos en las reclamaciones de orden laboral, y no genera un déficit de protección del derecho a la tutela judicial efectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte declarará exequible de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido según el cual en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse medidas cautelares innominadas, previstas en el literal "c" del numeral 1º del artículo 590 del CGP. (...)"

De lo anterior, se concluye que en nueva lectura que realiza la Corte Constitucional, es admisible aplicar por remisión analógica al procedimiento laboral las medidas cautelares innominadas de que trata el **literal C del numeral 1º del artículo 590 del CGP**, que corresponden a cualquier medida que el juez encuentre razonable para entre otros, proteger el derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la mismas, debiendo el juez para decretarla, apreciar la legitimación para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o vulneración del derecho.

De su lectura, también se desprende que expresamente **se diferenció de aquellas contenidas en los demás literales de dicho articulado**, como lo es el **embargo y secuestro y la inscripción de la demanda**, que se aplican en el marco de un proceso que se adelanta ante la **jurisdicción civil** cuando se persiga el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual.

Finalmente, debe la Sala señalar que al revisar el expediente y con las pruebas hasta ahora aportadas⁷ no se evidencia que los demandados hubiesen incurrido actos tendientes a insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia, tampoco se observa que se encuentren en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, situaciones contempladas en el artículo 85 A del CPTSS como requisitos para imponer medidas cautelares en el proceso ordinario laboral.

En estos términos, se CONFIRMARÁ en su integridad la decisión que se revisa. Al no salir adelante el recurso, se condenará en costas a la parte actora a 1 salario mínimo mensual legal vigente, en los términos del artículo 365 del CGP.

4. DECISIÓN

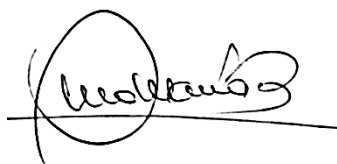
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en la audiencia celebrada el **14 de diciembre de 2022**.

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte actora en valor de 1 salario mínimo mensual legal vigente.

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

⁷ Carpeta Primera Instancia – PDF 49 Páginas 2 a 8, 9 a 16 y 25 a 42



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
Nº **93** del **1º** de junio de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>



RADICADO: 05001 31 05 013 2021 00359 01

AUTO del //31/05/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EsWFuUzqoxtOvLigmWazm2QB3B9aJ8veHAb5xplw78S8zw?e=hwLZyG